

Sin horizonte

Santos Juliá, El País, 15 de julio de 2012

Tanto tiempo llevamos sometidos a declaraciones inanes, desmentidas por los hechos a poco de emitirse; tanto tiempo sufriendo las consecuencias de medidas que nunca se iban a adoptar; tanto tiempo hace ya que estaba a la vuelta de la esquina el día en que por fin íbamos a sacar la cabeza del hoyo, que por vez primera en lo que se alcanza a la mirada de los más viejos cunde una sensación de fatalismo, o sea, de que la nave del Estado va sin rumbo y que nadie hay en ella capaz de gobernarla. No es que no hayamos atravesado antes malos, y aun peores, momentos; es que ahora, el mal momento se ha convertido en catastrófica situación, en un presente sin futuro.

A semejante estado de ánimo colectivo ha contribuido la confusión y el desorden, disimulados bajo mantos de falsas palabras, que se han apoderado de los Gobiernos del Estado desde, al menos, mayo de 2010 hasta hoy mismo. Nada de lo que desde aquel mes y año hemos oído ha sido verdadero ni veraz. Mentiras y disimulos, nunca enfrentando la situación como puede y debe exigirse en una democracia, revitalizando el Parlamento, diagnosticando los hechos tal como son, alentando el debate público, buscando el respaldo ciudadano para las políticas que sea menester adoptar. Si alguna vez fue realmente necesario un debate sobre el llamado estado de la nación, era esta; si alguna vez necesitamos comisiones parlamentarias que hurguen en las causas del gran quebranto, es esta. Un Estado gobernado por mandato exterior, un Gobierno que se asoma al abismo cada vez que anuncia otra vuelta de tuerca, una sociedad en quiebra y un futuro sin horizonte: tal es el resultado.

Y así, lo único sorprendente es que la respuesta social sea tan contenida. Lo fue hace un año el movimiento del 15-M, que adoptó el aire de una lúdica indignación en la plaza pública; lo es la de estos mineros que se echan a la carretera cuando el Estado, rompiendo sus compromisos, los borra de la tierra. Lo es sobre todo la de una creciente multitud de jóvenes que, careciendo de futuro en su país, no tienen más remedio que hacer las maletas. La historia se repite: todavía perduran en nuestras retinas las imágenes del gran éxodo a Francia, Alemania, Suiza, Inglaterra de millones de emigrantes, una fuerza de

trabajo barata que sirvió para alargar la duración de los treinta años gloriosos de Europa a la vez que contribuían a financiar, con sus remesas de divisas, los planes de desarrollo impulsados por aquellos tecnócratas de misa y comunión diaria.

Otra vez, pues, España país de emigración. Pero ahora no son campesinos que abandonan las tierras ni obreros que dejan atrás las chabolas. Los que emigran hoy pertenecen a las generaciones saludadas en su día como las mejor formadas de nuestra historia. Entre esos cientos de miles hay un buen puñado de jóvenes que han dedicado cuatro o cinco años a preparar tesis doctorales en las más diversas disciplinas, que luego han disfrutado de becas posdoctorales y que ahora, tras emplear entre diez y quince años de sus vidas entre tesis, becas y contratos se encuentran, como los proletarios de ayer, con el boleto de despido en la mano; universitarios que han trabajado duro, que han invertido tiempo y esfuerzo con la vista puesta en la docencia y en la investigación, que han publicado magníficos trabajos en revistas científicas, aquí y en el extranjero, y que ahora, cuando han rebasado los 30 años de edad, tienen que mirar afuera, por ver si se ofrece algo en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos, donde sea.

En cualquier otro país se habría levantado un clamor de alarma: no solo perdemos a chorros profesionales altamente cualificados; es que además la universidad española despide a sus más jóvenes profesores e investigadores, precisamente cuando nuestra producción en ciencias y humanidades comenzaba a homologarse con lo que se hace por el mundo adelante. La consigna es: amortizar plazas, ni un solo contrato más, recortar hasta la asfixia a la universidad pública. Tiempo vendrá en que lamentemos una sangría de tan catastrófica magnitud que, si no es detenida, certificará un nuevo fracaso histórico, el de una sociedad que contando con un capital humano de primera calidad, clausuró programas de investigación y expulsó a sus jóvenes profesores e investigadores; una sociedad y un Estado que permanecen inermes, pasivos, ante el éxodo de lo mejor de una generación condenada en su país a vivir sin ningún horizonte.

La política contra el Estado

Santos Juliá, El País, 29 de julio de 2012

Se acaba el curso, la clase política se tomará sus vacaciones y tal vez el Estado pueda darse un respiro. Porque el resumen de lo que nos está ocurriendo de un tiempo a esta parte es que aquel Estado que a finales del siglo XX parecía un logro histórico ha entrado, en lo que llevamos de siglo XXI, en una carrera hacia su desmantelamiento y liquidación. Y no es solo el mercado el que anima y empuja esa carrera, es también la política; o por decirlo en plural, no son los mercados, son los políticos.

Estado es hoy, sobre todo, administración de recursos públicos, por más que quienes siguen alimentando el mito romántico de la soberanía de los pueblos gusten de echar sobre sus espaldas misiones históricas. Los Estados no tienen más misión que garantizar los derechos individuales, cívicos y sociales de los ciudadanos. Y la política o el sistema de la política no debía tener otra función que equipar al Estado con los medios necesarios para que esa garantía sea efectiva: libertad, seguridad, educación, sanidad, servicios públicos, administración de justicia, en eso se resume el Estado.

Repetir este lugar común a estas alturas del curso carecería de sentido si no fuera porque lo primero en que este gobierno se ha aplicado para romper el vicioso círculo del derrumbe económico es liquidar el Estado montando una ofensiva en toda regla contra la función pública, como si fueran el número o las retribuciones de sus asalariados la causa de la crisis. Reducción de empleo público en todos los servicios y rebaja de salarios a todos los funcionarios son las medidas tomadas —antes que la persecución del fraude fiscal en sus múltiples variedades, por ejemplo— para equilibrar unos presupuestos que no han sido precisamente esos funcionarios, con sueldos que no llegan tantas veces ni a dos mil euros, los culpables de desequilibrar.

Es imposible que el Estado siga cumpliendo la principal función que legitima su existencia si esta ofensiva contra los que mantienen vivos sus servicios y su administración no se detiene y no se revierte. Hay que repetirlo: ni el Estado español está sobredimensionado en los servicios que presta a los ciudadanos ni en el personal que los atiende, ni el ataque lanzado desde la

política contra ese Estado va a sacarnos de la crisis. Lo que al final se conseguirá será un imparable deterioro del sector público, en calidad humana y en servicios, que tardará décadas en repararse: el logro de finales del siglo XX se habrá convertido en la ruina del XXI.

Pero aquel Estado podía también presentar como un logro el relativo equilibrio, alcanzado por vez primera de manera estable, entre los principios de libertad individual y autonomía territorial, fundamentales piezas de nuestro sistema democrático. Y es curioso, y decepcionante, que el presidente de la Generalitat haya vinculado internamente —es ahora o nunca la desconfianza con la que el mundo mira a España con la oportunidad que se presenta a Cataluña para afirmarse como país. Decepcionante porque es como la noria de una historia que tuvo en la guerra civil, con el mundo mirando a España no con desconfianza sino con horror, un antecedente heroico cuando Cataluña —en realidad, su gobierno— intentó una paz separada ofreciendo su territorio a la colonial tutela francobritánica.

Lamentablemente, si nuestra reciente historia hasta finales del siglo XX podía contarse como un logro en lo que se refería a la construcción de un Estado social, autonómico y democrático de derecho, no ha ocurrido lo mismo con la formación de una clase política que ha reproducido las pautas de particularismo, clientelismo y corrupción que acabaron por asfixiar en tiempos pasados al mismo Estado. El desmantelamiento de los servicios públicos por esta ofensiva contra los funcionarios y el clamor del “sálvese quien pueda” que ha surgido del Parlament de Cataluña en la peor semana —hasta ahora— de esta interminable crisis, prueban bien el déficit de lealtad al Estado de una clase política incapaz de mirar más allá de sus intereses inmediatos.

Y para remate de este aciago curso, el ministro de Justicia no tiene mejor ocurrencia que reafirmar el derecho al nacimiento de los fetos con graves malformaciones genéticas. Y esto no es solo un ataque frontal desde la política al Estado; esto es una entrega al fanatismo y al oscurantismo religioso, la más devastadora de nuestras tradiciones históricas, la que cuenta entre sus mayores éxitos haber impedido durante cerca de dos siglos la construcción de un Estado de derecho.